JUZGADO VEINTICINCO CIVIL DEL CIRCUITO

Bogotá D.C; dos de febrero de dos mil veintitrés.

Acción de tutela No. 110013103 025 2023 00023 00

Resuelve el juzgado la acción de tutela formulada por Silfredo de Jesús Guerra Ortiz, contra la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, previo los siguientes,

1. ANTECEDENTES

1.1. Pretende el accionante la protección de sus derechos fundamentales de petición e igualdad, presuntamente conculcados por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, al no emitir respuesta a su derecho de petición. En consecuencia, solicita: *“Ordenar UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS. Contestar el DERECHO DE PETICIÓN de fondo (sic). Ordenar a UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS contestar el derecho de petición manifestando una fecha en la cual serán emitidas y entregadas mis cartas cheque”.*

1.2. Como fundamentos fácticos relevantes expuso, en resumen, que, el día 2 de diciembre de 2022 elevó un derecho de petición ante la accionada, solicitando una fecha cierta en la cual recibiría su carta cheque, a fin de cobrar la indemnización por desplazamiento forzado, pues ya cumplió con el diligenciamiento del formulario y la actualización de datos; no obstante, la entidad tutelada no ha emitido respuesta de fondo, configurándose así la vulneración de los derechos fundamentales aquí invocados.

1.3. Asumido el conocimiento de la presente causa por parte de este Estrado Judicial, se dispuso oficiar a la accionada, a fin de que rindiera un informe detallado sobre las manifestaciones contenidas en el escrito de tutela; así mismo, remitiera copia de la documentación que para el caso en concreto correspondiera.

1.3.1. La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, manifestó, en síntesis, que, dio respuesta a la petición incoada por el señor SILFREDO DE JESÚS GUERRA ORTIZ, mediante comunicación LEX 7179237, en la cual se informa que dicha entidad está realizando las verificaciones correspondientes en los diferentes sistemas de información para poder establecer de manera definitiva si le asiste o no el derecho a recibir la medida. Por lo tanto, no resulta procedente señalar una fecha cierta de pago.

Por lo anterior, en el presente asunto, se configuró el fenómeno de carencia actual de objeto por hecho superado, siento entonces improcedente la

acción de amparo aquí deprecada.

2. CONSIDERACIONES

2.1. La Constitución Política en su artículo 86 estableció la acción de tutela, con el objeto de que toda persona pueda reclamar en todo tiempo y lugar, mediante un procedimiento breve y sumario la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de particulares en casos excepcionales.

2.2. El presente trámite se inició principalmente por la presunta vulneración al derecho de petición. El artículo 13 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el canon 1º de la Ley 1755 de 2015 *-por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-*, y el cual se acompasa con lo previsto en la norma 23 Superior, lo ha definido como el que tiene toda persona para presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular, con miras a obtener una pronta resolución, advirtiéndose, además, por vía jurisprudencial que a diferencia de los términos o procedimientos judiciales, esta protección fundamental es una vía expedita de acceso directo a las autoridades, y aunque su objetivo no incluye la exigencia de una resolución en un sentido determinado, sí intima para que exista un pronunciamiento oportuno y concreto frente a la reclamación que se invoca.

Por otro lado, conforme lo establece el artículo 14 del CPACA, modificado por la citada Ley, salvo norma especial, las peticiones se resolverán o contestarán dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de su recibo. Asimismo, y conforme al parágrafo de dicho canon normativo, en caso de no resolverse la petición dentro del lapso citado *"la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado (...) expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo en que se resolverá o dará repuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto"*.

Adicional a lo anterior, recuerda esta judicatura que, conforme a los lineamientos antes expuestos, el término de 15 días con que originalmente contaban las entidades, para resolver la petición formulada, dicho plazo fue ampliado conforme a lo establecido en el artículo 5 del Decreto 491 de 2020¹,

¹ Artículo 5. Ampliación de términos para atender las peticiones. Para las peticiones que se encuentren en curso o que se radiquen durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria, se ampliarán los términos señalados en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, así: Salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.

expedido por el Gobierno Nacional con ocasión al estado de emergencia sanitaria decretado, por lo que el estudio de las peticiones causa de la acción de amparo debían responderse dentro del término de 30 días. Posteriormente, mediante la Ley 2207 del 17 de mayo de 2022, se derogó el precepto 5º antes mencionado, por lo que, a partir del día siguiente de la promulgación de esa norma, el término para resolver las peticiones, volvió a ser de 15 días.

2.3. Respecto al derecho de petición y protección reforzada de personas en situación de desplazamiento.

La H. Corte Constitucional en reiterados pronunciamientos ha resaltado que la obligación de garantizar el derecho de petición adquiere gran relevancia cuando son presentados por víctimas del desplazamiento forzado, más aún si las solicitudes se encuentran encaminadas a conceder la atención y reparación, por tratarse de sujetos de especial protección constitucional.

En sentencia T- 839 de 2006, definió los criterios que deben respetar y seguir todas las entidades competentes para resolver ese tipo de peticiones, estos son: *“i) incorporar la solicitud en la lista de desplazados peticionarios; ii) informarle a la víctima de desplazamiento forzado dentro del término de quince (15) días el tiempo máximo dentro del cual le dará respuesta a la solicitud; iii) informarle dentro del mismo término si la solicitud cumple con los requisitos para su trámite, y en caso contrario, indicarle claramente cómo puede corregirla para que pueda acceder a los programas de ayuda; iv) si la solicitud cumple con los requisitos, pero no existe la disponibilidad presupuestal, tendrá que adelantar los trámites necesarios para obtener los recursos, determinará las prioridades y el orden en que las resolverá; v) si la solicitud cumple con los requisitos y existe disponibilidad presupuestal suficiente, procederá a informar cuándo se hará realidad el beneficio y el procedimiento que se seguirá para que sea efectivamente recibido. Indicando, de igual forma, que la autoridad encargada no se encuentra en la posibilidad de exigir una orden procedente de un fallo de tutela para garantizar los derechos de estos sujetos y abstenerse de cumplir sus deberes”*.

Así, la Corte ha considerado que la adecuada atención a las peticiones presentadas por los desplazados hace parte de *“aquel mínimo de protección que debe recibir quien pertenece a esta población. En esa medida, las autoridades encargadas de atender este tipo de peticiones deben tener en cuenta que el manejo de dicha información, lo que incluye su registro y control, resulta de*

Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:

(i) Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los veinte (20) días siguientes a su recepción.

(ii) Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta y cinco (35) días siguientes a su recepción (...).

*suma importancia, en pro de una respuesta y comunicación efectiva con el peticionario, en estos casos, sujeto de especial protección constitucional*². Por dicho motivo, al peticionario se le debe garantizar una respuesta de fondo, que sea sustentada por un estudio juicioso y apropiado de lo que se haya solicitado.

2.4 En el presente asunto, el accionante reclama la protección de sus derechos fundamentales de petición e igualdad presuntamente vulnerado por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, al no contestar el derecho de petición incoado el pasado 02 de diciembre de 2022.

Como sustento de la acción, se allegó copia del aludido derecho de petición, al que le fue asignado el radicado 2022-8502671-2 por parte de la autoridad accionada, solicitando lo siguiente:

“(...) De acuerdo a lo anterior y de acuerdo al formulario diligenciado. En mi caso de INDEMNIZACIÓN POR EL HECHO VICTIMIZANTE DE DESPLAZAMIENTO FORZADO. En particular CUANDO me entregan la carta cheque.

De acuerdo a mi proceso. Se me asigne una fecha exacta del Desembolso de estos recursos.

Se me asigne una fecha exacta de desembolso ya que se venció la fecha que tenía esta entidad que era para el 31 de Julio de 2022.

No se me siga dilatando el pago de mis recursos con la aplicación del MTP ya es menester asignar una fecha exacta de desembolso.

Se me expida una copia de certificación de inclusión en el RUV”.

En el curso de la presente acción, la entidad convocada, acreditó haber remitido el día 24 de enero de 2023, comunicación con destino al accionante- *con acuse de recibido*-, al correo electrónico silfredodejesusguerraortiz@gmail.com, comunicación numerada bajo el código Lex 7179237, en la que se lee, entre otras cosas, lo siguiente:

“Dando respuesta a su petición, relacionada con la indemnización administrativa por el hecho de DESPLAZAMIENTO FORZADO con declaración BE000356175, la Unidad para las Víctimas se permite informar que este proceso no es sencillo ni inmediato razón por la cual en varios casos no ha sido posible culminar el proceso de reconocimiento de indemnización. No obstante, con el fin de dar respuesta a su petición, le informamos que la Unidad para las Víctimas está realizando las verificaciones correspondientes en los diferentes sistemas de información para poder establecer de manera definitiva si le asiste el derecho o no a recibir la medida. Por lo anterior, no es procedente señalar la fecha cierta de pago (...)”

Como se puede evidenciar de la anterior contrastación (petición- respuesta), lo pedido por el accionante y lo contestado por la accionada,

² Corte Constitucional, Sentencia T-254 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

se evidencia que, no se resolvió materialmente lo solicitado por el señor SILFREDO GUERRA, pues si bien la autoridad señaló que no era posible establecer una fecha cierta de pago, no es menos que, en el contenido de la misiva se indica que ello obedece a que no aún no ha culminado el proceso administrativo tendiente a definir si tiene o no derecho a la indemnización reclamada; sin embargo, nada se dijo acerca de una fecha probable, plazo máximo, o época razonable en el cual le sería definida su situación particular, de acuerdo al procedimiento y cronograma establecido por la entidad y normatividad aplicable, dejando en total incertidumbre e indefinición al accionante acerca de la medida de reparación reclamada.

Además, mírese que, la entidad emitió una información de manera general sin ahondar en las particularidades que pueda revestir la solicitud del accionante, ya que dijo estar adelantando las verificaciones correspondientes en los diferentes sistemas de información, sin puntualizar en información relevante para definir el estado de la misma, esto es, ¿cuáles son esos sistemas de información a que se refiere en su comunicación?, o ¿cuál sería la siguiente etapa o procedimiento a surtir? y ¿cuál sería la fecha razonable y probable en la que culminaría el procedimiento de verificación de información?, si es que existe algún plazo máximo para ello. Lo anterior, resulta determinante para que el accionante se encuentre debidamente enterado del procedimiento que ha de seguir su solicitud y, la fecha en la cual posiblemente sería definida la prestación.

Por lo anterior, el juzgado considera que, la respuesta emitida por la Unidad para las Víctimas no satisface el núcleo esencial del derecho de petición del accionante, ya que no ofrece una respuesta satisfactoria, clara, suficiente y congruente en simetría con el objeto de la solicitud, situación que conlleva a la trasgresión de dicha prerrogativa constitucional.

En ese orden de ideas, se ordenará a la autoridad accionada que, dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta decisión, emita al accionante una respuesta formal clara, precisa, suficiente y congruente con lo solicitado en la petición bajo radicado No. 2022-8502671-2 del 2 de diciembre de 2022, y su contenido sea notificado en debida forma en la dirección física o electrónica suministrada para tal fin.

2.5. Finalmente, sobre el derecho a la igualdad, la Corte Constitucional tiene dicho que esta garantía superior *“comprende (i) un mandato de trato idéntico a destinatarios que se encuentren en circunstancias idénticas, (ii) un mandato de trato enteramente diferenciado a destinatarios cuyas situaciones no comparten ningún elemento en común, (iii) un mandato de trato paritario a destinatarios cuyas situaciones presenten similitudes y diferencias, pero las similitudes sean más relevantes a pesar de las diferencias y, (iv) un*

*mandato de trato diferenciado a destinatarios que se encuentren también en una posición en parte similar y en parte diversa, pero en cuyo caso las diferencias sean más relevantes que las similitudes*³. En este caso, el accionante no menciona situaciones o circunstancias específicas que, en su caso, permitan avizorar la transgresión de este derecho fundamental por parte de la Unidad accionada, por lo que, ninguna protección podría dispensarse en tal sentido.

3. CONCLUSIÓN

En estas condiciones, se concederá la protección al derecho fundamental de petición, en la medida que, el juzgado constató que la respuesta ofrecida por la entidad accionada no satisface el núcleo esencial de petición, ya que no resuelve materialmente el objeto de la solicitud incoada.

4. DECISIÓN DE PRIMER GRADO

Con fundamento y apoyo en lo dicho, el Juzgado Veinticinco Civil del Circuito de Bogotá D.C., administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

4.1. CONCEDER la protección constitucional al derecho fundamental de petición del señor Silfredo de Jesús Guerra Ortiz, en contra de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.

En consecuencia, para su restablecimiento, se dispone:

ORDENAR a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas que, dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta decisión, profiera al accionante una respuesta clara, precisa, suficiente y congruente con lo solicitado en la petición bajo radicado No. 2022-8502671-2 del 2 de diciembre de 2022 en los términos indicados en la parte considerativa, y su contenido sea notificado en debida forma en la dirección física o electrónica suministrada para tal fin. Acredítese su cumplimiento, so pena de incurrir en desacato.

4.2. Notificar este fallo conforme a lo previsto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

4.3. Remitir las diligencias a la Corte Constitucional para su

³ Corte Constitucional, sentencia T-068 de 2019

eventual revisión, si esta decisión no es impugnada.

Cúmplase.

El Juez,

LUIS AUGUSTO DUEÑAS BARRETO

T-2023-00023

L.S.S.

Firmado Por:
Luis Augusto Dueñas Barreto
Juez
Juzgado De Circuito
Civil 025
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **dd718f143538d62598247fe4f3c03a771230e00616ec00e2d36fa7221ec0c823**

Documento generado en 02/02/2023 01:16:38 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>